

En la sesión extraordinaria efectuada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo mediante el cual se establecen los límites al financiamiento privado a los que están sujetos las y los candidatos independientes registrados para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato.

ANTECEDENTES:

Reforma constitucional en materia electoral

I. Mediante decreto número 176 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, tercera parte, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Reforma legal en materia electoral

II. Mediante decreto número 180 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, cuarta parte, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Reforma a la ley electoral local

III. Mediante decreto número 189 de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 84, tercera parte, de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

***Topes de gastos de campaña para el
proceso electoral local ordinario 2017-2018***

IV. En la sesión extraordinaria del catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante acuerdo CGIEEG/038/2018, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 38, segunda parte, de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General determinó los topes de gastos de las campañas para ayuntamientos, diputaciones al Congreso del

Estado por el principio de mayoría relativa y gubernatura del estado, para el proceso electoral 2017-2018.

***Aprobación de registro de candidaturas independientes
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018***

V.En las sesiones especiales celebradas por el Consejo General los días seis y once de abril de dos mil dieciocho, se aprobó el registro de veinticuatro planillas de candidatas y candidatos independientes para contender en la elección de ayuntamientos, en los municipios siguientes:

Municipio	Planillas registradas
Acámbaro	2
Apaseo el Grande	3
Atarjea	1
Celaya	1
Comonfort	1
Dolores Hidalgo C.I.N	2
Huanímaro	1
Irapuato	1
Ocampo	1
Pénjamo	1
Salamanca	2
San Felipe	1
San Miguel de Allende	2
Santa Cruz de Juventino Rosas	1
Tarimoro	1
Uriangato	1
Valle de Santiago	1
Villagrán	1
Total	24

En la sesión especial celebrada por el Consejo General en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, se aprobó el registro de dos fórmulas de diputaciones por el principio de mayoría relativa de candidatos independientes para contender en la elección de diputaciones locales en los distritos locales siguientes:

Distrito	Fórmulas registradas
Distrito Electoral XVI de Celaya	1
Distrito Electoral XVII de Santa Cruz de Juventino Rosas	1
Total	2

***Solicitudes de candidatos independientes
relativas al límite de financiamiento privado***

VI. En fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de la misma fecha, signado por los ciudadanos José Omar Julián Cabrera Ramírez y Regina Muñoz García, representante legal de la Asociación Civil “LA SUMA DE TODOS SOMOS PÉNJAMO”, y la entonces aspirante a candidata independiente a la alcaldía de Pénjamo, Guanajuato, respectivamente, dirigido a las autoridades electorales de este Instituto.

En fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de la misma fecha, signado por el licenciado Francisco Arreguín Arreguín, representante legal de la Asociación Civil “TODOS SOMOS CELAYA”, y dirigido al Consejero Presidente de este Instituto.

En fecha seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de la misma fecha, signado por el ciudadano Gerardo González Gutiérrez, representante legal de la Asociación Civil “URIANGATO PRÓSPERO”, y dirigido a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto.

En fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de la misma fecha, signado por el ciudadano Jorge Humberto Rodríguez Mojica, representante legal de la Asociación Civil “RESPONSABLES POR DOLORES”, y dirigido al Consejo General de este Instituto.

En fecha doce de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de la misma fecha, signado por el ciudadano Ernesto Alejandro Pérez Guerrero, candidato independiente a la alcaldía de Ocampo, Guanajuato, y dirigido al Consejo General de este Instituto.

En fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito de fecha veintitrés de abril, signado por Jesús Guillermo García Flores, representante propietario ante el Consejo Municipal de Salamanca del candidato independiente Tomás Gutiérrez Ramírez, y dirigido al Consejo General de este Instituto.

De la lectura de los escritos, se desprende que coinciden al solicitar que esta autoridad electoral se pronuncie por la aprobación de un porcentaje mayor sobre el tope de gatos de campaña aprobado para la elección de ayuntamientos, con

relación al porcentaje que ordena el artículo 326 de la ley electoral local, que a la letra señala:

Artículo 326. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate.

El porcentaje que demandan en sus escritos, para determinar el financiamiento privado al que tendrían derecho, refiere al 50% del tope de gastos de la elección de ayuntamientos.

A efecto de lo anterior, los solicitantes respaldan sus escritos en lo siguiente:

Tesis XXI/2015. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. –

Jurisprudencia 7/2016. FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA Y SIMILARES). –

Recepción de proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos

VII. En fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Presidencia del Consejo General de este Instituto, el oficio CPFPP/017/2018 suscrito por Antonio Ortiz Hernández, consejero electoral y Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos, por el que remite el proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los límites al financiamiento privado a los que están sujetos las y los candidatos independientes para el proceso electoral 2017- 2018.

CONSIDERANDO:

Organización de los procesos electorales locales

1. De conformidad con el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público electoral local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

Personalidad y principios que rigen al IEEG

2. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Órgano de dirección del IEEG

3. El artículo 81 de la ley electoral local, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Facultad normativa del Instituto

4. De conformidad con el artículo 92, fracción II, de la legislación electoral local, es atribución del Consejo General dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de dicha legislación.

Disposiciones de la ley electoral local que regulan el financiamiento privado para candidaturas independientes

5. El artículo 320 de la ley electoral local establece como prerrogativa y derecho de las candidaturas independientes, entre otras, la de obtener financiamiento público y privado, en los términos de esta Ley.

El artículo 325 de la ley electoral local señala que el régimen de financiamiento de los candidatos independientes será público y privado.

Ahora bien, el artículo 326 de la ley electoral establece que el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen las y los candidatos

independientes y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate.

Por otro lado, el artículo 327 de la ley electoral, relacionado con la fracción VI del artículo 321, enlista quienes no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo o en especie por sí o por interpósita persona, a las candidaturas independientes a cargos de elección popular.

Por último, el artículo 329 de la ley electoral precisa que, para el manejo de los recursos de campaña electoral se deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiera la referida ley y que todas las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria.

Criterios de interpretación para establecer los límites al financiamiento privado para candidaturas independientes

6. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Tesis XXI/2015, determinó lo siguiente:

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- A la luz de una interpretación armónica de los artículos 35, fracción II, y 41, base II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en una interpretación pro persona del derecho de las y los ciudadanos a ser votados a través de una candidatura independiente, resulta indubitable que a esta figura no le es aplicable el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas electorales. Esta conclusión se sustenta en tres premisas. La primera consiste en que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que los partidos políticos y las y los candidatos independientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el marco normativo de los primeros no es aplicable a los segundos. Así, resulta inviable aplicar a las candidaturas independientes las limitaciones que, según se desprende de una interpretación literal, teleológica y originalista del artículo 41, base II, constitucional, fueron diseñadas exclusivamente para un esquema normativo e institucional de partidos políticos. La segunda se refiere a que el principio constitucional que se estudia contiene una limitación respecto al financiamiento privado, razón por la cual no puede ser aplicada por analogía para un supuesto para el cual no fue creado y que no es jurídicamente análogo. La tercera y última premisa, consiste en que la medida resulta desproporcionada para las y los candidatos independientes, puesto que al tener un financiamiento público significativamente inferior al de

quienes contienen representando a un partido político, el hecho de que el financiamiento privado se vea topado por el público, conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de competir en una elección. Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal debe interpretarse de conformidad con los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme a estos preceptos, los derechos políticos deben entenderse también como oportunidades de contender y ganar una elección. Por ello, resulta parte del contenido constitucional del derecho a ser votado a través de una candidatura independiente, el que la participación en una campaña electoral se entienda como una oportunidad real y efectiva de tener éxito.

Quinta Época:

Recurso de reconsideración. [SUP-REC-193/2015](#).—Recurrente: Arne Sidney Aus Den Ruthen Haag.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—29 de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 45, 46 y 47”.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, determino la siguiente **Jurisprudencia 7/2016:**

“FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA Y SIMILARES).- De una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 1; 35, fracción II; 41, fracción II y 116, fracción IV, incisos g), k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos; [25, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos](#); [23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos](#); 21, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 228 y 237, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se advierte que la equidad en el financiamiento público estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los contendientes en un proceso electoral perciban lo que proporcionalmente les

corresponde acorde a su grado de representatividad; así el financiamiento de los candidatos independientes debe sujetarse al principio de equidad de forma tal que les permita contender en igualdad de circunstancias respecto de quienes son postulados por partidos políticos. En tal sentido, el límite para el financiamiento privado de los candidatos independientes, previsto en el artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en el cual se prevé que éstos no podrán rebasar el 50% del tope de gasto de campaña para candidatos independientes de la elección de que se trate, resulta una medida proporcional y equitativa en tanto que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, el cual suele ser significativamente inferior al que es otorgado a sus similares que compiten postulados por un partido político o coalición”.

Quinta Época:

Contradicción de criterios. [SUP-CDC-2/2016](#).—Entre los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—1 de junio de 2016.—Mayoría de tres votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: María del Carmen Alanís Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Alejandra Díaz García y José Alberto Montes de Oca Sánchez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de junio de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de tres votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera y con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, y del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la jurisprudencia que antecede y la declaró

Formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 25 y 26.

En atención a las solicitudes presentadas por las candidaturas independientes referidas en el antecedente sexto del presente acuerdo se razona que el sentido del precepto legal es establecer que el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realiza el candidato independiente y sus simpatizantes, **sin rebasar, en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate**, en tal circunstancia, no estamos ante una laguna legal, por el contrario, partiendo del principio de legalidad y del criterio de interpretación gramatical de la norma, nuestra legislación establece claramente la forma en que deberá fijarse el

límite de financiamiento privado para las candidaturas independientes y sus simpatizantes.

Al respecto, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante resolución TEEG-REV-29/2015, determinó:

Se considera que el actuar de la autoridad responsable estuvo ajustado a derecho, al negar la ampliación del financiamiento privado a los candidatos independientes, dado que el mismo se determinó en base a lo establecido en la Ley Electoral Local, sin que se pueda considerar que con ello se vulnere el principio de equidad, pues como se dijo, la candidatura independiente y el partido político son instituciones diferentes que justifican una regulación diferente.

Aunado a lo anterior, en el **numeral segundo del ACUERDO INECG 281/2018, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE SE POSTULAN PARA UN CARGO FEDERAL DE ELECCIÓN POPULAR DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS CONCURRENTES DE 2017-2018**, se establece que para el caso de los Organismos Públicos Locales Electorales que no hayan emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas de candidatos independientes a cargos locales y sus simpatizantes, se sujetarán a dicho acuerdo, y se establece como límite el **10% del tope de gasto para la elección de que se trate.**

***Cálculo del financiamiento privado para candidaturas
Independientes, proceso electoral 2017-2018***

7. Al realizar la operación prevista en el artículo 326 de la ley electoral local, y tomando como base los topes de gastos de las campañas para ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral local 2017-2018, se obtiene el resultado siguiente:

Límites al financiamiento privado para las candidaturas independientes en la elección de ayuntamientos:

Municipio	Candidato/Candidata independiente a	Asociación Civil	<u>Base de cálculo</u> Tope de	Límite de financiamiento
-----------	-------------------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------

	presidente municipal		gasto de campana CGIEEG/038/2018	privado para CI ¹ Art. 326 (10%)
Acámbaro	Juan José Velázquez Torres	FUERZA INDEPENDIENTE DE ACÁMBARO	1,166,816.55	116,681.66
Acámbaro	Mateo Sacramento Flores Contreras	ACÁMBARO DE TODOS, MOVIMIENTO CIUDADANO INDEPENDIENTE	1,166,816.55	116,681.66
Apaseo el Grande	Hugo Antonio Razo Salazar	BIENESTAR SOCIAL DE APASEO	1,008,259.82	100,825.98
Apaseo el Grande	Martin Jiménez Mata	APASEENSES CON MOTIVACIÓN	1,008,259.82	100,825.98
Apaseo el Grande	Víctor Manuel Rico Escamilla	VICTOR RICO POR APASEO EL GRANDE	1,008,259.82	100,825.98
Atarjea	J. Guadalupe Flores Loyola	ATARJENCES UNIDOS	203,556.07	20,355.61
Celaya	Francisco Javier Mendoza Márquez	TODOS SOMOS CELAYA	4,719,173.21	471,917.32
Comonfort	José Alberto Méndez Pérez	COMONFORT INDEPENDIENTE	877,592.34	87,759.23
Dolores Hidalgo C.I.N.	Francisco Javier Romero Hernández	RESPONSABLES POR DOLORES	1,468,807.26	146,880.73
Dolores Hidalgo C.I.N.	José Julio González Landeros	VA POR MI GENTE, VA POR DOLORES, SOY INDEPENDIENTE	1,468,807.26	146,880.73
Huanímaro	Roberto Contreras Núñez	HUANÍMARO DEMOCRÁTICO	347,784.22	34,778.42
Irapuato	Ricardo Castro Torres	CONSTRUYAMOS JUNTOS A IRAPUATO	5,011,163.13	501,116.31
Ocampo	Ernesto Alejandro Pérez Guerrero	OCAMPO, GUANAJUATO SOMOS TODOS	314,509.97	31,451.00
Pénjamo	Regina Muñoz García	LA SUMA DE TODOS SOMOS	1,573,176.30	157,317.63

¹ Candidatura Independiente.

		PÉNJAMO		
Salamanca	César Armando del Ángel Acosta	CIUDADANOS UNIDOS POR SALAMANCA	2,985,644.71	298,564.47
Salamanca	Tomás Gutiérrez Ramírez	SALMANTINOS CON VOLUNTAD Y CARÁCTER	2,985,644.71	298,564.47
San Felipe	José Luis Gameros Hidalgo Monroy	GTO AL CONTROL CIUDADANO	1,024,380.25	102,438.03
San Miguel de Allende	Ángel Arriaga Cerritos	TIEMPOS MEJORES PARA SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,594,617.68	159,461.77
San Miguel de Allende	Mario Arturo Hernandez Peña	RED SANMIGUELENSE SOMOS	1,594,617.68	159,461.77
Santa Cruz de Juventino Rosas	Martín Guerrero García	CANDIDATURA INDEPENDIENTE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	900,055.27	90,005.53
Tarimoro	Alfredo Saavedra	LIC. ALFREDO SAAVEDRA	456,033.54	45,603.35
Uriangato	Juvenal Villagómez Vieyra	URIANGATO PRÓSPERO	1,158,257.64	115,825.76
Valle de Santiago	José Ramón Rodríguez Gómez	TRANSFORMANDO VALLE DE SANTIAGO	1,526,636.88	152,663.69
Villagrán	Hugo Macías San Elías	POR UN VILLAGRÁN INDEPENDIENTE	970,009.26	97,000.93

Límites al financiamiento privado para las candidaturas independientes en la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa:

Distrito	Candidato/Candidata Independiente a diputado local propietario	Asociación Civil	Base de cálculo Tope de gasto de campaña CGIEEG/038/2018	Límite de financiamiento o privado para CI Art. 326 (10%)
Distrito Electoral XVI de	Eugenio Aranguena Sharpe	EVOLUCIÓN INDEPENDIENTE	2,295,881.32	229,588.13

Celaya				
Distrito Electoral XVII de Santa Cruz de Juventino Rosas	Cuahutémoc Mora Loma	POR UN CONGRESO INDEPENDIENTE	2,354,777.32	235,477.73

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, párrafos primero y segundo, 81, 92, fracción II, 320, 321, fracción VI, 325, 326, 327 y 329 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Los límites al financiamiento privado a los que están sujetos las y los candidatos independientes registrados para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, para la elección de ayuntamientos son los siguientes:

Municipio	Candidato/Candidata independiente a presidente municipal	Asociación Civil	Base de cálculo Tope de gasto de campaña CGIEEG/038/2018	Límite de financiamiento privado para CI² Art. 326 (10%)
Acámbaro	Juan José Velázquez Torres	FUERZA INDEPENDIENTE DE ACÁMBARO	1,166,816.55	116,681.66
Acámbaro	Mateo Sacramento Flores Contreras	ACÁMBARO DE TODOS, MOVIMIENTO CIUDADANO INDEPENDIENTE	1,166,816.55	116,681.66
Apaseo el Grande	Hugo Antonio Razo Salazar	BIENESTAR SOCIAL DE APASEO	1,008,259.82	100,825.98
Apaseo el Grande	Martin Jiménez Mata	APASEENSES CON MOTIVACIÓN	1,008,259.82	100,825.98

² Candidatura Independiente.

Apaseo el Grande	Víctor Manuel Rico Escamilla	VICTOR RICO POR APASEO EL GRANDE	1,008,259.82	100,825.98
Atarjea	J. Guadalupe Flores Loyola	ATARJENCES UNIDOS	203,556.07	20,355.61
Celaya	Francisco Javier Mendoza Márquez	TODOS SOMOS CELAYA	4,719,173.21	471,917.32
Comonfort	José Alberto Méndez Pérez	COMONFORT INDEPENDIENTE	877,592.34	87,759.23
Dolores Hidalgo C.I.N.	Francisco Javier Romero Hernández	RESPONSABLES POR DOLORES	1,468,807.26	146,880.73
Dolores Hidalgo C.I.N.	José Julio González Landeros	VA POR MI GENTE, VA POR DOLORES, SOY INDEPENDIENTE	1,468,807.26	146,880.73
Huanímaro	Roberto Contreras Núñez	HUANÍMARO DEMOCRÁTICO	347,784.22	34,778.42
Irapuato	Ricardo Castro Torres	CONSTRUYAMOS JUNTOS A IRAPUATO	5,011,163.13	501,116.31
Ocampo	Ernesto Alejandro Pérez Guerrero	OCAMPO, GUANAJUATO SOMOS TODOS	314,509.97	31,451.00
Pénjamo	Regina Muñoz García	LA SUMA DE TODOS SOMOS PÉNJAMO	1,573,176.30	157,317.63
Salamanca	César Armando del Ángel Acosta	CIUDADANOS UNIDOS POR SALAMANCA	2,985,644.71	298,564.47
Salamanca	Tomás Gutiérrez Ramírez	SALMANTINOS CON VOLUNTAD Y CARÁCTER	2,985,644.71	298,564.47
San Felipe	José Luis Gameros Hidalgo Monroy	GTO AL CONTROL CIUDADANO	1,024,380.25	102,438.03
San Miguel de Allende	Ángel Arriaga Cerritos	TIEMPOS MEJORES PARA SAN MIGUEL DE ALLENDE	1,594,617.68	159,461.77
San Miguel de Allende	Mario Arturo Hernandez Peña	RED SANMIGUELENSE SOMOS	1,594,617.68	159,461.77
Santa Cruz	Martín Guerrero	CANDIDATURA	900,055.27	90,005.53

de Juventino Rosas	García	INDEPENDIENTE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS		
Tarimoro	Alfredo Saavedra	LIC. ALFREDO SAAVEDRA	456,033.54	45,603.35
Uriangato	Juvenal Villagómez Vieyra	URIANGATO PRÓSPERO	1,158,257.64	115,825.76
Valle de Santiago	José Ramón Rodríguez Gómez	TRANSFORMANDO VALLE DE SANTIAGO	1,526,636.88	152,663.69
Villagrán	Hugo Macías San Elías	POR UN VILLAGRÁN INDEPENDIENTE	970,009.26	97,000.93

SEGUNDO. Los límites al financiamiento privado a los que están sujetos las y los candidatos independientes registrados para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, para la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa son los siguientes:

Distrito	Candidato/Candidata Independiente a diputado local propietario	Asociación Civil	<u>Base de cálculo</u> Tope de gasto de campaña CGIEEG/038/2018	Límite de financiamiento o privado para CI Art. 326 (10%)
Distrito Electoral XVI de Celaya	Eugenio Aranguena Sharpe	EVOLUCIÓN INDEPENDIENTE	2,295,881.32	229,588.13
Distrito Electoral XVII de Santa Cruz de Juventino Rosas	Cuauhtémoc Mora Loma	POR UN CONGRESO INDEPENDIENTE	2,354,777.32	235,477.73

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la o el representante de las candidaturas independientes registradas.

CUARTO. En los términos señalados en el considerando seis, se da respuesta a las solicitudes presentadas por las candidaturas independientes referidas en el antecedente sexto del presente acuerdo.

QUINTO. La suma de las aportaciones que realicen las y los candidatos independientes, así como sus simpatizantes, no podrá rebasar el límite de financiamiento privado que se establece para cada uno de ellos.

SEXTO. Remítase copia certificada del presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo Local en el estado de Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar.

SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaria Ejecutiva del mismo.

El presente acuerdo fue aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por mayoría de seis votos de las Consejeras y Consejeros Electorales Indira Rodríguez Ramírez, Sandra Liliana Prieto de León, Beatriz Tovar Guerrero, Luis Miguel Rionda Ramírez y Antonio Ortiz Hernández, y del Consejero Presidente Mauricio Enrique Guzmán Yáñez; con el voto en contra del Consejero Electoral Santiago López Acosta, quien agrega voto particular.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO ELECTORAL SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA, RESPECTO DEL ACUERDO CGIEEG/193/2018 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍMITES AL FINANCIAMIENTO PRIVADO A LOS QUE ESTÁN SUJETOS LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 2018.

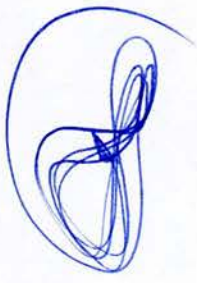
En este asunto **NO COMPARTO** lo aprobado por la mayoría de los consejeros electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el 25 de abril de 2018, en razón de lo siguiente:

Durante el proceso electoral 2014-2015, el que suscribe presente dos votos particulares, uno en contra del acuerdo CGIEEG/057/2015 referente a la consulta formulada por el representante financiero de la candidata independiente a la presidencia municipal de Pénjamo, Guanajuato, relativo a la solicitud de ampliación al financiamiento privado que pueda recibir su representada, y el CGIEEG/062/2015 sobre la consulta formulada por el representante legal de la asociación civil "Unidos por el desarrollo de Comonfort", relativa a la solicitud de ampliación al financiamiento privado que pueda recibir su representada; en ambos casos mi voto se pronuncio en torno a que en los acuerdos no se atendían los principios constitucionales sobre protección de derechos humanos, concretamente el principio de legalidad y el principio de equidad en la contienda, ya que aprobados los acuerdos como se propusieron, generaría una enorme desproporción que atentaría directamente al principio de equidad para la participación de las planillas de candidatos independientes a los ayuntamientos de Pénjamo y Comonfort respectivamente, en relación al resto de sus contendientes de los partidos políticos, ya que estos últimos tendrían acceso a un financiamiento superior a aquellos.

La reforma al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, establece la obligación de las autoridades (sin diferenciar entre las administrativas y las jurisdiccionales) a que, si existen diversas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano, lo que conlleva a que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano, aplicando el principio pro persona.

En dicha reforma refiere la "interpretación conforme", al señalar que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales.

Además, en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, establece la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma, queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados



internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. La reforma también implica que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos se cumplan a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.

Además, debe considerarse la jurisprudencia 28/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO – ELECTORALES, que señala:

[...]

La progresividad es uno de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los político– electorales. El cual tiene una proyección en dos vertientes. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de tales derechos, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al Estado a limitar las modificaciones -formales o interpretativas- al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquellas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo.

De la jurisprudencia en cita, de aplicación obligatoria para las autoridades electorales en el ámbito de su competencia, se advierte que por ningún motivo se puede realizar una interpretación restrictiva a los derechos humanos, ya que limita a las autoridades a través de una prohibición de regresividad respecto de tales derechos.

La Sala Superior del TEPJF en el SUP-REC/193/2015, señaló que el principio pro persona reconocido en el segundo párrafo del artículo 1º constitucional establece que en la labor interpretativa, las y los operadores jurídicos deberán favorecer siempre a las personas, lo cual implica que ante dos posibles interpretaciones de un precepto normativo, deba elegirse inevitablemente aquella que, siendo jurídicamente válida, resulte más amplia en cuanto a los alcances de un derecho, o menos restrictiva en cuanto al entendimiento de los límites al mismo. De esta forma, la omisión de referencias sobre los límites o montos del financiamiento privado no debe entenderse como un error, sino como la intención del órgano legislativo de dejar fuera del ámbito de las candidaturas independientes el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

El Acuerdo que se aprobó por mayoría en el Pleno de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, violenta el derecho a ser votado, establecido en el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹. Dentro de las vertientes de este derecho, se encuentra la de

¹ El texto original del precepto en comento establecía lo siguiente:
Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:
I.- [...];

contender en una campaña electoral. Sobre el tema la Sala Superior ha sostenido que debe de tutelarse la posibilidad real de éxito de una campaña, de modo que los actos partidistas o estatales que disminuyan las posibilidades de éxito deberán entenderse como una trasgresión al citado derecho². El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene que garantizar que las candidaturas independientes tengan posibilidades reales de éxito, de modo que su reconocimiento constitucional se traduzca en su tutela desde una óptica material y no estrictamente formal, como se presenta en el acuerdo que nos ocupa.

En este sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Gelman Vs. Uruguay*,¹⁴ asunto en el cual estableció³:

La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, *per se*, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo "susceptible de ser decidido" por parte de las mayorías en instancias democráticas [...].

En efecto, si las personas que aspiran a un cargo de elección popular carecen de posibilidades reales de competir y, eventualmente, ganar, se estarían produciendo tres violaciones de gran trascendencia para el orden constitucional: *(i)* por una parte se está vulnerando su derecho a ser votadas; *(ii)* por otra parte se está afectando el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política distinta a la ofrecida por el esquema tradicional de los partidos políticos, trasgrediendo esa dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de elección popular; y *(iii)* finalmente, se estaría vaciando de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal forma que termina por hacerse nugatorio. Resultaría un contrasentido limitar las posibilidades reales de competir y ganar en una elección de las y los candidatos independientes, en aras de favorecer a los partidos políticos como consecuencia de su rol para permitir el acceso ciudadano al poder público. Esto equivaldría a limitar un derecho ciudadano en aras de fortalecer el mismo derecho ciudadano ejercido por una vía distinta⁴.

II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; [...].

² Tesis XLVIII/2001, cuyo rubro es "DERECHO A SER VOTADO. COMPRENDE LA CORRECTA UBICACIÓN EN LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SUJETA A REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS)". Tercera Época. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 52 y 53. La tesis surgió de un asunto en el cual se consideró que la posición de un candidato de representación proporcional en la lista respectiva tenía una relación directa con sus posibilidades de alcanzar una diputación.

³ 14 Corte IDH. Caso *Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221.

⁴ Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-REC-193/2015.

Al respecto, es importante recordar que el derecho a ser votado también se encuentra reconocido en normas de origen internacional, que forman parte del marco jurídico del Estado Mexicano, al reconocer el derecho al voto pasivo, tanto el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que las personas tienen "derechos y oportunidades". Así, la mención de las oportunidades pone un énfasis especial respecto a la obligación de los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para materializar los derechos políticos formalmente reconocidos.

El artículo 41, Base II, de la Constitución establece que la ley debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, para lo cual señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo asegurar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

La cantidad de recursos privados que pueden recibir los candidatos independientes para sus campañas ha sido objeto de pronunciamiento del TEPJF en varias ocasiones. En los casos SUP-REC-193/2015 y SUP-JRC- 582/2015, la Sala Superior consideró que los candidatos independientes no están sujetos al principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, como es el caso de los partidos políticos. La Sala basó su decisión en los argumentos acerca de la equidad en la contienda y en la distinción entre las figuras de partidos políticos y candidatos independientes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que y los candidatos independientes se encuentran en un supuesto jurídico distinto al de los partidos políticos. Así, resultaría extremadamente perjudicial para el derecho de las personas que aspiren a una candidatura independiente que, por una parte, les sean negados los derechos y prerrogativas de los partidos políticos por considerar que pertenecen a una categoría jurídica distinta y no equiparable, mientras que, por otra, sí les son aplicables las limitaciones constitucionales y legales desarrolladas para dichas agrupaciones.

La Sala Superior del TEPJF, sostuvo que los candidatos independientes deben poder recibir mayores aportaciones privadas para equilibrar su situación frente a los candidatos propuestos por partidos políticos. Según el TEPJF, al tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de competir en una elección, como el derecho a ser votado, reconocido constitucionalmente y a través de los tratados internacionales; por lo que implica tener oportunidades de contender y ganar una elección, debe conllevar el establecimiento de condiciones de equidad en la contienda. De ahí la necesidad de que los candidatos independientes reciban mayor cantidad de recursos privados, pero solamente los necesarios para complementar el financiamiento público y poder alcanzar el límite establecido en el tope de gastos de campaña y tener con ello una oportunidad real y efectiva de tener éxito (SUP-JRC-582/2015).



Estas sentencias condujeron a la emisión de la Tesis XXI/2015 (CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS) por parte de la Sala Superior, en la cual se establece que el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas electorales no les es aplicable a las candidaturas independientes.

Sí se toma en cuenta lo argumentado por la Sala Superior en la tesis referida, el límite de aportaciones privadas de los candidatos independientes, más el límite de aportaciones públicas, no podrán tener otra limitante más que los candidatos independientes no rebasen el tope de gastos de campaña aprobado por este Instituto para el ayuntamiento o distrito en el que participen; lo anterior permitiría que los candidatos independientes participen en igualdad de condiciones con un candidato de partido político y que pueda hacer efectivo el derecho a ser votado consagrado en la Constitución.

Durante el proceso electoral local 2015-2016, la Sala Superior del TEPJF resolvió una contradicción de criterios entre lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-1579/2016 y la determinación tomada por la Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-188/2016, resolviendo que es constitucional establecer que los candidatos independientes puedan recibir financiamiento privado hasta por 50% del tope de gastos de campaña. Este criterio generó la emisión de la Jurisprudencia 7/2016 (FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, ES CONSTITUCIONAL), la cual debería servir como criterio para este Instituto al momento de establecer el financiamiento privado al que deberán de sujetarse los candidatos independientes.

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas, presento junto con el consejero electoral Roberto Ruiz Saldaña, presentaron su voto particular en contra del Acuerdo INE/CG281/2018, por el que se determinan los límites de Financiamiento Privado que podrían recibir los candidatos independientes que se postulan para un cargo federal de elección popular durante el periodo de campaña para los procesos electorales ordinarios concurrentes de 2017-2018. La consejera electoral manifiesta que comparte los criterios que ha venido adoptando la Sala Superior del TEPJF como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a desarrollar un esquema de competencia más equitativo en los procesos electorales, señala como ejemplo, la interpretación que realizó la Sala Superior a favor de las y los candidatos independientes con relación al principio constitucional de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, criterio que ya ha sido señalado en párrafos anteriores. Además sobre la competencia que tienen las autoridades electorales para interpretar las normas refirió:

[...]

la aplicación estricta y directa de una norma que instrumenta un derecho humano sin tomar en cuenta en primer lugar las obligaciones a las que estamos constreñidas las autoridades del Estado Mexicano y en segundo que las y los candidatos postulados por un partido político y quienes cometen a través de la figura de candidaturas independientes se encuentran en situaciones jurídicas y condiciones relacionadas con el financiamiento público muy distintas resulta desproporcionada para el ejercicio del derecho humano a ser votado ya que el hecho de que el financiamiento privado se encuentre limitado al 10% del tope de gastos de las y los candidatos postulados por los partidos políticos reduce significativamente su oportunidad real y efectiva de tener éxito por lo que se vuelve inoperante el efecto útil que le Constituyente pretendió otorgarle al derecho a ser votado al ampliar sus alcances⁵”.

El acuerdo del Instituto Nacional Electoral citado en los párrafos anteriores, fue impugnado por la candidata independiente a la Presidencia de la República Margarita Ester Zavala del Campo; por Manuel Clouthier y Pablo Salazar aspirantes al Senado; y por Luisa María Calderón, candidata a la Cámara de Diputados; la Sala Superior del TEPJF resolvió el día de hoy 25 de abril de 2018 en el SUP-JDC-222/2018, presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, de manera unánime, que dicho criterio ocasiona una desventaja a los candidatos independientes y viola el principio de equidad en la contienda electoral. La sentencia aprobada además refiere que el monto que debe permitirse a las candidaturas independientes por concepto de financiamiento privado, debe ser equivalente al que falta para alcanzar el tope de gastos de campaña, considerando el financiamiento público a que tienen derecho. Con lo resuelto por la Sala Superior se robustece el planteamiento que se presenta en este voto particular⁶.


DR. SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA

**CONSEJERO ELECTORAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

FECHA	25.04.18
HORA	19:54
RECIBO	Jesse M. C.
SECRETARÍA	
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	
UNIDAD TÉCNICA	
UNIDAD DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	

⁵ Voto particular al acuerdo INE/CG281/2018, de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.

⁶ La información que se presenta ha sido consultada el día 25 de abril de 2018 a las 19:20 horas en: <http://www.binoticias.com/nota.cfm?id=23831&t=aprueba-tepjf-subir-tope-de-aportaciones-privadas-para-independientes>, lo anterior debido a que la resolución SUP-JDC/222/2018 no se encuentra disponible en la página oficial del TEPJF hasta el momento y hora que se presenta el voto particular.

ALCANCE AL:

VOTO PARTICULAR QUE FORMULÓ EL CONSEJERO ELECTORAL SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA, RESPECTO DEL ACUERDO CGIEEG/193/2018 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍMITES AL FINANCIAMIENTO PRIVADO A LOS QUE ESTÁN SUJETOS LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 2018.

En este asunto **NO COMPARTO** lo aprobado por la mayoría de los consejeros electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el 25 de abril de 2018, en razón de lo siguiente:

Durante el proceso electoral 2014-2015, el que suscribe presente dos votos particulares, uno en contra del acuerdo CGIEEG/057/2015 referente a la consulta formulada por el representante financiero de la candidata independiente a la presidencia municipal de Pénjamo, Guanajuato, relativo a la solicitud de ampliación al financiamiento privado que pueda recibir su representada, y el CGIEEG/062/2015 sobre la consulta formulada por el representante legal de la asociación civil "Unidos por el desarrollo de Comonfort", relativa a la solicitud de ampliación al financiamiento privado que pueda recibir su representada; en ambos casos mi voto se pronuncio en torno a que en los acuerdos no se atendían los principios constitucionales sobre protección de derechos humanos, concretamente el principio de legalidad y el principio de equidad en la contienda, ya que aprobados los acuerdos como se propusieron, generaría una enorme desproporción que atentaría directamente al principio de equidad para la participación de las planillas de candidatos independientes a los ayuntamientos de Pénjamo y Comonfort respectivamente, en relación al resto de sus contendientes de los partidos políticos, ya que estos últimos tendrían acceso a un financiamiento superior a aquellos.

La reforma al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, establece la obligación de las autoridades (sin diferenciar entre las administrativas y las jurisdiccionales) a que, si existen diversas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano, lo que conlleva a que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano, aplicando el principio pro persona.

En dicha reforma refiere la "interpretación conforme", al señalar que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales.

Además, en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, establece la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma,

queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. La reforma también implica que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos se cumplan a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.

Además, debe considerarse la jurisprudencia 28/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO – ELECTORALES, que señala:

[...]

La progresividad es uno de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los político– electorales. El cual tiene una proyección en dos vertientes. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de tales derechos, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al Estado a limitar las modificaciones -formales o interpretativas- al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquellas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo.

De la jurisprudencia en cita, de aplicación obligatoria para las autoridades electorales en el ámbito de su competencia, se advierte que por ningún motivo se puede realizar una interpretación restrictiva a los derechos humanos, ya que limita a las autoridades a través de una prohibición de regresividad respecto de tales derechos.

La Sala Superior del TEPJF en el SUP-REC/193/2015, señaló que el principio pro persona reconocido en el segundo párrafo del artículo 1º constitucional establece que en la labor interpretativa, las y los operadores jurídicos deberán favorecer siempre a las personas, lo cual implica que ante dos posibles interpretaciones de un precepto normativo, deba elegirse inevitablemente aquella que, siendo jurídicamente válida, resulte más amplia en cuanto a los alcances de un derecho, o menos restrictiva en cuanto al entendimiento de los límites al mismo. De esta forma, la omisión de referencias sobre los límites o montos del financiamiento privado no debe entenderse como un error, sino como la intención del órgano legislativo de dejar fuera del ámbito de las candidaturas independientes el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

El Acuerdo que se aprobó por mayoría en el Pleno de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, violenta el derecho a ser votado, establecido en el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹. Dentro de las vertientes de este derecho, se encuentra la de

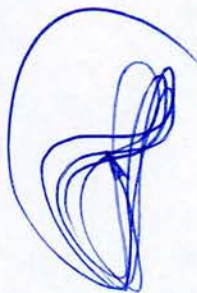
¹ El texto original del precepto en comento establecía lo siguiente:
Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:

contender en una campaña electoral. Sobre el tema la Sala Superior ha sostenido que debe de tutelarse la posibilidad real de éxito de una campaña, de modo que los actos partidistas o estatales que disminuyan las posibilidades de éxito deberán entenderse como una trasgresión al citado derecho². El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene que garantizar que las candidaturas independientes tengan posibilidades reales de éxito, de modo que su reconocimiento constitucional se traduzca en su tutela desde una óptica material y no estrictamente formal, como se presenta en el acuerdo que nos ocupa.

En este sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Gelman Vs. Uruguay*,¹⁴ asunto en el cual estableció³:

La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, *per se*, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo "susceptible de ser decidido" por parte de las mayorías en instancias democráticas [...].

En efecto, si las personas que aspiran a un cargo de elección popular carecen de posibilidades reales de competir y, eventualmente, ganar, se estarían produciendo tres violaciones de gran trascendencia para el orden constitucional: *(i)* por una parte se está vulnerando su derecho a ser votadas; *(ii)* por otra parte se está afectando el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política distinta a la ofrecida por el esquema tradicional de los partidos políticos, trasgrediendo esa dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de elección popular; y *(iii)* finalmente, se estaría vaciando de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal forma que termina por hacerse nugatorio. Resultaría un contrasentido limitar las posibilidades reales de competir y ganar en una elección de las y los candidatos independientes, en aras de favorecer a los partidos políticos como consecuencia de su rol para permitir el acceso ciudadano al poder público. Esto equivaldría a limitar un derecho ciudadano en aras de fortalecer el mismo derecho ciudadano ejercido por una vía distinta⁴.



I.- [...];

II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; [...].

² Tesis XLVIII/2001, cuyo rubro es "DERECHO A SER VOTADO. COMPRENDE LA CORRECTA UBICACIÓN EN LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL SUJETA A REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS)". Tercera Época. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 52 y 53. La tesis surgió de un asunto en el cual se consideró que la posición de un candidato de representación proporcional en la lista respectiva tenía una relación directa con sus posibilidades de alcanzar una diputación.

³ 14 Corte IDH. Caso *Gelman Vs. Uruguay*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221.

⁴ Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-REC-193/2015.

Al respecto, es importante recordar que el derecho a ser votado también se encuentra reconocido en normas de origen internacional, que forman parte del marco jurídico del Estado Mexicano, al reconocer el derecho al voto pasivo, tanto el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que las personas tienen "derechos y oportunidades". Así, la mención de las oportunidades pone un énfasis especial respecto a la obligación de los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para materializar los derechos políticos formalmente reconocidos.

El artículo 41, Base II, de la Constitución establece que la ley debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, para lo cual señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo asegurar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

La cantidad de recursos privados que pueden recibir los candidatos independientes para sus campañas ha sido objeto de pronunciamiento del TEPJF en varias ocasiones. En los casos SUP-REC-193/2015 y SUP-JRC- 582/2015, la Sala Superior consideró que los candidatos independientes no están sujetos al principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, como es el caso de los partidos políticos. La Sala basó su decisión en los argumentos acerca de la equidad en la contienda y en la distinción entre las figuras de partidos políticos y candidatos independientes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que y los candidatos independientes se encuentran en un supuesto jurídico distinto al de los partidos políticos. Así, resultaría extremadamente perjudicial para el derecho de las personas que aspiren a una candidatura independiente que, por una parte, les sean negados los derechos y prerrogativas de los partidos políticos por considerar que pertenecen a una categoría jurídica distinta y no equiparable, mientras que, por otra, sí les son aplicables las limitaciones constitucionales y legales desarrolladas para dichas agrupaciones.

La Sala Superior del TEPJF, sostuvo que los candidatos independientes deben poder recibir mayores aportaciones privadas para equilibrar su situación frente a los candidatos propuestos por partidos políticos. Según el TEPJF, al tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de competir en una elección, como el derecho a ser votado, reconocido constitucionalmente y a través de los tratados internacionales; por lo que implica tener oportunidades de contender y ganar una elección, debe conllevar el establecimiento de condiciones de equidad en la contienda. De ahí la necesidad de que los candidatos independientes reciban mayor cantidad de recursos privados, pero solamente los necesarios para complementar el financiamiento público y poder alcanzar el límite establecido en el tope de gastos de campaña y tener con ello una oportunidad real y efectiva de tener éxito (SUP-JRC-582/2015).

Estas sentencias condujeron a la emisión de la Tesis XXI/2015 (CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS) por parte de la Sala Superior, en la cual se establece que el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas electorales no les es aplicable a las candidaturas independientes.

Sí se toma en cuenta lo argumentado por la Sala Superior en la tesis referida, el límite de aportaciones privadas de los candidatos independientes, más el límite de aportaciones públicas, no podrán tener otra limitante más que los candidatos independientes no rebasen el tope de gastos de campaña aprobado por este Instituto para el ayuntamiento o distrito en el que participen; lo anterior permitiría que los candidatos independientes participen en igualdad de condiciones con un candidato de partido político y que pueda hacer efectivo el derecho a ser votado consagrado en la Constitución.

Durante el proceso electoral local 2015-2016, la Sala Superior del TEPJF resolvió una contradicción de criterios entre lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-1579/2016 y la determinación tomada por la Sala Regional Guadalajara en el expediente SG-JDC-188/2016, resolviendo que es constitucional establecer que los candidatos independientes puedan recibir financiamiento privado hasta por 50% del tope de gastos de campaña. Este criterio generó la emisión de la Jurisprudencia 7/2016 (FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, ES CONSTITUCIONAL), la cual debería servir como criterio para este Instituto al momento de establecer el financiamiento privado al que deberán de sujetarse los candidatos independientes.

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas, presento junto con el consejero electoral Roberto Ruiz Saldaña, presentaron su voto particular en contra del Acuerdo INE/CG281/2018, por el que se determinan los límites de Financiamiento Privado que podrían recibir los candidatos independientes que se postulan para un cargo federal de elección popular durante el periodo de campaña para los procesos electorales ordinarios concurrentes de 2017-2018. La consejera electoral manifiesta que comparte los criterios que ha venido adoptando la Sala Superior del TEPJF como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a desarrollar un esquema de competencia más equitativo en los procesos electorales, señala como ejemplo, la interpretación que realizó la Sala Superior a favor de las y los candidatos independientes con relación al principio constitucional de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, criterio que ya ha sido señalado en párrafos anteriores. Además sobre la competencia que tienen las autoridades electorales para interpretar las normas refirió:

[...]

la aplicación estricta y directa de una norma que instrumenta un derecho humano sin tomar en cuenta en primer lugar las obligaciones a las que estamos constreñidas las autoridades del Estado Mexicano y en segundo que las y los candidatos postulados por un partido político y quienes cometen a través de la figura de candidaturas independientes se encuentran en situaciones jurídicas y condiciones relacionadas con el financiamiento público muy distintas resulta desproporcionada para el ejercicio del derecho humano a ser votado ya que el hecho de que el financiamiento privado se encuentre limitado al 10% del tope de gastos de las y los candidatos postulados por los partidos políticos reduce significativamente su oportunidad real y efectiva de tener éxito por lo que se vuelve inoperante el efecto útil que le Constituyente pretendió otorgarle al derecho a ser votado al ampliar sus alcances⁵”.

Se modifica:

El acuerdo del Instituto Nacional Electoral citado en los párrafos anteriores, fue impugnado por la candidata independiente a la Presidencia de la República Margarita Ester Zavala del Campo; por Manuel Clouthier y Pablo Salazar aspirantes al Senado; y por Luisa María Calderón, candidata a la Cámara de Diputados; la Sala Superior del TEPJF **resolvió el día 25 de abril de 2018 en el SUP-JDC-222/2018 y acumulados, presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera y votado de manera unánime, el cual considero como criterio orientador la resolución SUP-JDC/2/2016 de la misma deriva la Jurisprudencia 7/2016 citada en párrafos anteriores, señalando que si bien la misma deriva de la contradicción de criterios que estaba relacionada con una legislación local donde se disponía un límite tasado mayor al federal (cincuenta por ciento del tope de gastos de campaña), serviría como referencia al caso concreto, por los razonamientos ahí vertidos, dado que reconoció las diferencias sustanciales que se presentan entre partidos políticos y candidaturas independientes.**

Se agrega:

Además, señaló que el financiamiento público que reciben los candidatos independientes es significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, por lo que es razonable que los candidatos independientes tengan la posibilidad de acceder a un financiamiento privado sustancialmente mayor al que reciben por concepto de financiamiento público, para que tengan la posibilidad de contender en condiciones de igualdad.

El Pleno de la Sala Superior resolvió declarar procedente la inaplicación en el caso concreto de la porción normativa del artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala “el cual no podrá

⁵ Voto particular al acuerdo INE/CG281/2018, de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.

rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gastos para la elección de que se trate”, además ordenó al Consejo General del INE emitir un nuevo acuerdo en el que se determinen límites de financiamiento privado a todas las candidaturas independientes involucradas en el proceso electoral federal 2017- 2018, que le permitan alcanzar los topes de gastos campaña fijados con el Acuerdo INE/CG505/2017, estimando que el límite de financiamiento privado que fije el Consejo General del mismo órgano nacional para las candidaturas independientes debe considerar dos factores: 1) el tope de gastos fijados en la elección de que se trate y 2) el financiamiento público a que tiene derecho cada candidatura⁶. Con lo resuelto por la Sala Superior se robustece el planteamiento que se presenta en este voto particular.



DR. SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA

CONSEJERO ELECTORAL DEL INSTITUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA Y DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	FECHA 26-04-18
	HORA 11:20
	RECIBO 

⁶ SUP- JDC/222/2018 y acumulados, resulto por unanimidad de votos de las Magistradas y Magistrados que integran la Sala Superior del TEJPF, el 25 de abril de 2018.